Bogotá́ D.C, abril de 2024

Doctor

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Secretario General Cámara de Representantes

Ciudad.

**Ref.:** Radicación Proyecto de Ley “*Por medio del cual se habilita el departamento de Nariño para la importación de cemento”.*

Apreciado Secretario:

Atendiendo a lo estipulado en el artículo 208 constitucional y en los artículos 139 y 140 de la Ley 5 de 1992, el Gobierno Nacional a través de los Ministros de Justicia y del Derecho y de Comercio, Industria y Turismo, presenta a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley *“Por medio del cual se habilita el departamento de Nariño para la importación de cemento”.*

Agradecemos por su conducto y de su equipo de trabajo que se pueda surtir el trámite legislativo previsto en el artículo 144 de la Ley 5 de 1992.

Cordialmente:

|  |  |
| --- | --- |
| **NÉSTOR IVÁN OSUNA PATIÑO**Ministro de Justicia y del Derecho  |  **GERMÁN UMAÑA MENDOZA**Ministro de Comercio, Industria y Turismo |
|  |   |

**PROYECTO DE LEY No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2024**

**“****POR MEDIO DEL CUAL SE HABILITA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA IMPORTACIÓN DE CEMENTO”**

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

**ARTÍCULO 1°. Objeto.** Habilitar el departamento de Nariño para la importación de cemento, vía fluvial y terrestre; única y exclusivamente por los lugares autorizados por la DIAN y para el consumo interno.

Dado que el producto en mención se encuentra entre las sustancias y productos químicos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, la importación estará sujeta a la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

**Parágrafo:** El Gobierno Nacional reglamentará los demás términos y condiciones para la importación de cemento por el departamento de Nariño.

**ARTÍCULO 2°.** **Vigencia.** La presente Ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

|  |  |
| --- | --- |
| **NÉSTOR IVÁN OSUNA PATIÑO**Ministro de Justicia y del Derecho  |  **GERMÁN UMAÑA MENDOZA**Ministro de Comercio, Industria y Turismo |

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**PROYECTO DE LEY No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2024**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE HABILITA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA IMPORTACIÓN DE CEMENTO”**

**CONTENIDO**

1. **OBJETIVO DEL PROYECTO**
2. **ANTECEDENTES NORMATIVOS**
	1. **Medida de carácter legal que prohíbe el ingreso de cemento al país por el Departamento de Nariño.**
	2. **Antecedentes surtidos en la Comunidad Andina de Naciones**
	3. **Normas comunitarias vulneradas**
	4. **El Sistema Andino de Integración. El Acuerdo de Cartagena. La balanza superavitaria en favor de la República de Colombia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**
3. **SITUACIONES QUE MOTIVAN LA HABILITACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE CEMENTO POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
4. **IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA**
5. **ANEXOS.**
6. **OBJETIVO DEL PROYECTO**

La presente iniciativa tiene por objeto habilitar una aduana adicional a las ya autorizadas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 2272 de 1991, permitiendo la importación de cemento por el departamento de Nariño. Lo anterior, atendiendo a los fallos emitidos los días 14 de octubre de 2022 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y el 02 de julio de 2013 por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) y, la emergencia presentada al sur del país, tras los reiterados deslizamientos en la vía Panamericana.

1. **ANTECEDENTES NORMATIVOS**
	1. **Medida de carácter legal que prohíbe el ingreso de cemento al país por el Departamento de Nariño.**

El parágrafo del artículo 1 del Decreto Ley 1146 de 1990, determinó múltiples restricciones a un conjunto determinado de sustancias y facultó al Consejo Nacional de Estupefacientes para establecer restricciones adicionales, a través de resolución, a las demás sustancias que puedan ser utilizadas para el procesamiento, fabricación o transformación de narcóticos o drogas que produzcan dependencia psíquica o física.

El artículo 29 del Decreto Ley 1146 de 1990, facultó al Consejo Nacional de Estupefacientes para que, mediante resolución y cuando lo estime necesario, prohíba o restrinja el almacenamiento, conservación o transporte de las sustancias que trata el artículo 1 de dicho Decreto, en ciertos sectores del territorio nacional; en ese sentido, en el artículo 2 de mismo texto, se estableció que la introducción de las mercancías enunciadas en el artículo 1, solo se podrá realizar por las Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura y Cartagena.

Asimismo, se estableció la facultad para delimitar las zonas de prohibición o restricción siguiendo las divisiones políticas que consagra la legislación, o por coordenadas geográficas, o en general, de cualquier otra forma que el Consejo Nacional de Estupefacientes estime conveniente.

El **artículo 4 del Decreto Ley 2272** **de 1991** adoptó como legislación permanente los **artículos 1, 2 y 29 del Decreto Legislativo 1146 de 1990**.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la propuesta de control de sustancias y productos químicos presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y por consiguiente expidió el 08 de enero de 2015 la **Resolución 0001** “*Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos*”, incluyendo en su artículo 4 el listado de sustancias y productos químicos controlados, dentro de los cuales se encuentra el cemento; por lo que en virtud del artículo 4° del Decreto Ley 2272 de 1991 y 158 de la Ley 2010 de 2019, solo se permite el ingreso de este producto y de los demás catalogados como controlados, por la ciudades de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta y, por los Departamentos de Amazonas y Guainía.

La **Circular 037 de 2016** de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, estableció los requisitos, permisos y autorizaciones exigidos por las entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, para la presentación de solicitudes de registro y licencia de importación.

En la actualidad, por virtud de los artículos 4° del Decreto Ley 2272 de 1991 y 158 de la Ley 2010 de 2019, solo se permite el ingreso de sustancias controladas, por las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta y, por los Departamentos de Amazonas y Guainía.

* 1. **Antecedentes surtidos en la Comunidad Andina de Naciones**

Teniendo en cuenta los antecedentes normativos, Colombia mediante Decreto Ley 2272 de 1991 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Circular 037 de 2016 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, autorizó el ingreso al territorio nacional de cemento gris importado, únicamente por las aduanas de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta y por las Zonas Francas ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Buenaventura y Cartagena.

El 22 de mayo de 2018, Ecuador solicitó a la Secretaría General de la Comunidad Andina que calificara dicha medida como una restricción al comercio intrasubregional, al no estar amparada en ninguna de las excepciones previstas en el segundo párrafo del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena; al impedirse que el cemento ecuatoriano ingrese al territorio colombiano a través de la frontera terrestre entre ambos países, específicamente a través del Puente Internacional de Rumichaca (Tulcán - Ipiales).

Mediante Resolución No. 2019 del 14 de agosto de 2018 de la Secretaria General de la Comunidad Andina, determinó que esta medida establecida por Colombia, no constituía una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en las excepciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

El día 21 de enero de 2020, la República de Ecuador presentó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCAN, demanda de Nulidad contra la Resolución No. 2019 del 14 de agosto de 2018, emitida por la Secretaria General de la Comunidad Andina.

Sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y conforme a lo previsto en los Artículos 17 del Tratado de Creación del TJCA10 39, 101 y 102 del Estatuto del TJCA11, el demandante solicitó el pronunciamiento del Tribunal por la supuesta contravención de los Artículos 1, 2, 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena 12, 5, 7 (literal c), 12, 31 52 y 54 de la Decisión 42513 y 6 de la Decisión 32614, al haber declarado la SGCA, mediante la Resolución 2019 de 14 de agosto de 2018, que la medida establecida por Colombia, que permite el ingreso de cemento gris importado a su territorio nacional (clasificado en la subpartida NANDINA «2523.29.00-Los demás»), únicamente por determinadas aduanas (en aplicación del Decreto 2272 de 1991, la Resolución 001-2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Circular 037 de 2016 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia), no constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

El 25 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico el Oficio OALI 2-2020-016890, a través del cual Colombia hizo conocer al Tribunal su propósito de actuar en calidad de coadyuvante de la SGCA dentro del presente proceso, en los términos descritos en el Artículo 72 del Estatuto del TJCA.

Por Auto de 17 de septiembre de 2020, entre otros, el Tribunal dispuso: i) tener por admitida la solicitud de coadyuvancia presentada por Colombia; ii) que el término de 40 días calendario para contestar la demanda en el presente proceso comenzará a computarse a partir del día siguiente de la fecha de notificación del Auto; y, iii) y le otorgó a Colombia el término de 40 días calendario para contestar la demanda.

El 23 de octubre de 2020, Colombia presentó escrito de contestación de la demanda, en su calidad de coadyuvante. Asimismo, el 27 de octubre de 2020, la SGCA presentó escrito de contestación de la demanda.

Por Auto de 24 de febrero de 2021, el Tribunal, entre otros, tuvo por contestada la demanda por parte de la SGCA y por parte de Colombia, admitiendo las excepciones previas formuladas por esta última, las cuales fueron puestas en conocimiento de la parte demandante. Posteriormente, en escritos del 5 de marzo de 2021 y 08 de marzo del mismo año, la SGCA y la República de Ecuador se pronunciaron respecto de las excepciones previas formuladas por Colombia.

Mediante Auto de fecha 23 de septiembre de 2021, el Tribunal declaró infundada e improcedente las excepciones previas formuladas por Colombia; presentándose recurso de reconsideración por parte de Colombia el 28 de septiembre de 2021; en ese sentido, el 04 de noviembre de 2021, Ecuador se pronuncia al respecto. Finalmente, por Auto de 24 de enero de 2022, el Tribunal negó en todas sus partes el recurso de reconsideración presentado por Colombia contra el Auto de 23 de septiembre de 2021.

Mediante Auto de 14 de marzo de 2022, el Tribunal se pronunció sobre los medios probatorios pertinentes, impertinentes e innecesarios ofrecidos y aportados por las partes; y, además, abrió un período de prueba, a efectos de que la SGCA remita copia íntegra del proceso administrativo que dio origen a la Resolución N° 2019 de 14 de agosto de 2018. Por lo que la SGCA el 01 de abril de 2022, remitió la documentación solicitada por el Tribunal y en Auto de 8 de abril de 2022, el Tribunal incorporó formalmente al proceso la copia del expediente administrativo remitido por la SGCA, y reconoció personería a sus abogados.

Mediante Auto de 18 de mayo de 2022, el Tribunal fijó la fecha del 23 de junio de 2022, a las 10:00 am, para la realización de la audiencia pública, la misma que, a solicitud de la SGCA, fue suspendida. Por lo que el 12 de julio de 2022, la SGCA presentó un escrito a través del cual se allanó a la demanda.

El 20 de julio del 2022, el Tribunal corrió traslado del escrito de allanamiento a Colombia y Ecuador. A lo que Ecuador y Colombia el 25 de julio de 2022, presentaron escritos por medio de los cuales se pronunciaron sobre el allanamiento de la SGCA.

Mediante Comunicación SG/E/SJ/951/2022 del 12 de julio de 2022, la SGCA se allanó a la demanda planteada por el Ecuador dentro del Proceso 02-AN-2020. Al respecto, El 25 de julio de 2022, Colombia presentó escrito en el que mantiene una postura contraria al allanamiento planteado por la SGCA. Por su parte, Ecuador, mediante escrito de 25 de julio de 2022, sostuvo que la SGCA, a través de su escrito de allanamiento, se ha alineado con el planteamiento efectuado en la demanda respecto del análisis jurídico erróneo contenido en la Resolución N° 2019, que no consideró la sustituibilidad en el tiempo de la medida implementada por Colombia. Asimismo, sostuvo que la SGCA, mediante su escrito de allanamiento, ha confirmado que la medida implementada por Colombia constituye una restricción al comercio, y que la coadyuvante no puede contradecir procesal ni jurídicamente la posición de su coadyuvada.

El día 14 de octubre de 2022 el TJCA dentro del Proceso 02-AN-2020 de Nulidad formulada por la República del Ecuador contra la Resolución 2019 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 14 de agosto de 2018, decidió:

* Declarar la nulidad total de la Resolución 2019 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 14 de agosto de 2018.
* Declarar que la medida establecida por el Gobierno Colombiano que permite el ingreso de cemento gris importado a su territorio nacional únicamente por determinadas aduanas es contraria a las disposiciones del Acuerdo de Cartagena y en consecuencia es una restricción al comercio intrasubregional.
	1. **Normas comunitarias vulneradas**
* Acuerdo de Cartagena, en adelante “AC” (Artículos 1, 2, 72 y 73)
* Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la SGCAN (Artículos 5, 7.c, 12, 31, 52 y 54)
* Decisión 326 de la Comisión de Cartagena (Artículo 6).
	1. **El Sistema Andino de Integración. El Acuerdo de Cartagena. La balanza superavitaria en favor de la República de Colombia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social, el 26 de mayo de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina (CAN).

Mediante este acuerdo de integración regional, se pretende promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.

Tal como consta en el estudio denominado “54 años de integración comercial de bienes en la Comunidad Andina, 1969-2023” [[1]](#footnote-1), publicado el pasado 1 de abril del año 2024 por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el ámbito comunitario, el saldo de la balanza comercial resulta superavitario para la República de Colombia.







Tal como ha sido desde el año 1991, para el año 2023, la balanza comercial colombiana con la Comunidad Andina ha sido superavitaria.

En el año 2023, Colombia exportó a los demás países Miembros de la Comunidad Andina bienes por un total de 3.274 millones de dólares, e importó bienes desde los demás países miembros de la Comunidad Andina por un valor de 2.012 millones de dólares.

En el mismo Acuerdo de Cartagena, como parte del Sistema Andino de Integración, los Países Miembros acordaron crear el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.

Dicho órgano es el encargado de definir las controversias de tipo comercial que puedan llegar a presentarse entre los Países Miembros.

1. **SITUACIONES QUE MOTIVAN LA HABILITACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE CEMENTO POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
* **Fallo del 14 de octubre de 2022 del TJCA dentro del Proceso 02-AN-2020.**

El 14 de octubre de 2022 el TJCAN determinó, mediante sentencia dictada en el Proceso 02-AN-2020, que **la República de Colombia restringe el comercio subregional andino al permitir el ingreso de cemento gris clasificado por la sub NANDINA 2523.29.00, a su territorio nacional únicamente por determinadas aduanas, en aplicación del Decreto Ley 2272 de 1991, la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Circular 037 de 2016 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**. Tal restricción constituye, según lo señalado por el TJCAN, un incumplimiento al artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, el cual señala:

*“El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.*

La razón principal que expuso el TJCAN para llegar a tal conclusión fue que la medida, a la fecha, no cumple con los requisitos para ser amparada en la excepción contenida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la cual los Estados tienen el derecho de adoptar y aplicar medidas para proteger, entre otros aspectos, la seguridad nacional, la moral pública y la vida y salud de las personas, así las mismas constituyan una restricción al comercio. Concretamente, el TJCAN determinó que el juicio de sustituibilidad, elemento esencial del test de proporcionalidad, ya no se cumplía, considerando que, si bien la medida en un principio no era sustituible y, por tanto, podía ser amparada en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, con el tiempo se tornó sustituible y Colombia pudo haber implementado medidas no restrictivas al comercio para proteger su seguridad nacional en dicha zona.

Además, el TJCAN basa su razonamiento en el escrito de allanamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina (“SGCAN”), en donde señala que hubo un error jurídico en la Resolución 2019 al no haber la SGCAN establecido un plazo perentorio para la aplicación de la medida por parte de la República de Colombia, “*plazo en el cual se hubiesen podido implementar medidas aduaneras y de controles de seguridad, para precisamente implementar medidas aduaneras y de controles de seguridad, para precisamente hacer en el tiempo sustituible la medida*”. Esto, sin dejar de lado que, para la SGCAN y el TJCAN, *“la insustitubilidad no es un concepto estático sino dinámico: era cierta al momento de expedir la resolución, pero dejó de serlo al transcurrir un tiempo durante el cual se pueden tomar medidas que rehabiliten la libre circulación de ese bien, sin restricción alguna”.*

Así mismo, la Secretaria General de la CAN adujo en el escrito de allanamiento, pieza fundamental de la sentencia del TJCAN, que el cemento es una mercancía común, normal, de libre venta en todos los Países miembros, no es un bien de comercio prohibido o ilegal de los contemplados en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, ni siquiera es una sustancia de circulación controlada como las reguladas en la Decisión 602 Norma Andina “para el Control de Sustancias Químicas que se utilizan para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, y concluye señalando que con la Resolución 2019, al no establecer un plazo, se tiene como resultado que una mercancía legal termina restringida en su comercio en forma indefinida, lo cual viola la zona andina de libre comercio y se erige como un retroceso en la misma.

Sin embargo, es importante señalar que las medidas colombianas fueron evaluadas por la SGCAN, órgano que concluyó en su Resolución 2019 de 2018 que las mismas persiguen un objetivo legítimo contemplado en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena consistente en preservar la seguridad en Colombia, por lo que constituye una excepción en el marco de la norma andina antes referida, y, consecuentemente no constituye una restricción al comercio subregional andino. Allí, la SGCAN especificó que la medida se aplica de manera no discriminatoria, siguiendo los principios de causalidad, proporcionalidad e insustituibilidad.

La sentencia del 14 de octubre de 2022 del TJCAN ha generado objeciones significativas por parte de la República de Colombia. Por un lado, se argumenta que no se respetó el principio de legalidad, ya que, de acuerdo con el derecho originario de los países miembros de la CAN, dentro del proceso de nulidad 02-AN-2020, el TJCAN solo tenía la competencia para decidir sobre la conformidad de la Resolución 2019 de 2018 de la SGCAN con el Ordenamiento Andino. Sin embargo, el TJCAN excedió sus competencias al calificar también las medidas adoptadas por Colombia como restrictivas, en un proceso que no fue creado con ese propósito. La calificación correspondía a un proceso de incumplimiento que requería agotar una fase prejudicial y garantizar a Colombia la oportunidad de pronunciarse, lo cual no ocurrió.

En segundo lugar, se argumenta que se violó el derecho de defensa, contradicción y en general el derecho a un debido proceso de Colombia. Esto se debe a que la Resolución 2019 de 2018 de la SGCAN, cuya nulidad se demandó en el proceso 02-AN-2020, fue emitida por la SGCAN. Como resultado, el TJCAN le negó a Colombia la oportunidad de defenderse, argumentando que la resolución discutida no era de su autoría y, por lo tanto, no le correspondía pronunciarse al respecto, por obrar en calidad de coadyuvante de la Secretaría General de la CAN.

A pesar de que existen aspectos fundamentales que son objeto de reclamación y respecto de los cuales Colombia está agotando las vías jurídicas a su alcance para asegurar el respeto por la legalidad y sus derechos al debido proceso y defensa; Colombia ha evaluado exhaustivamente la coyuntura y, en aras de restablecer la circulación terrestre del cemento gris clasificado por la subpartida NANDINA 2523.29.00 de procedencia de Ecuador, se propone implementar medidas aduaneras y de seguridad adicionales que permitan rehabilitar el ingreso de cemento gris a su territorio nacional no solo a través de la vía marítima, sino también desde Rumichaca.

* **Acción de incumplimiento de la Sentencia del 14 de octubre de 2022.**

Por otro lado, es importante mencionar que el día 06 de septiembre del 2023, el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón – INECYC, radicó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina demanda de acción de incumplimiento flagrante de la República de Colombia de las obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al permitir el ingreso de cemento gris por determinadas aduanas, a pesar de que tal medida fue declarada contraria a las disposiciones del artículo 72 de Acuerdo de Cartagena, y por lo tanto, al haber sido calificada como una restricción al comercio mediante sentencia de 14 de octubre de 2022 del TJCAN, dentro del Proceso 02-AN-2020.

El pasado 19 de marzo del presente año, la República de Colombia fue notificada de la admisión de una Acción de Incumplimiento en su contra, presentada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), por el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón (INECYC).

A través de dicha demanda, INECYC solicitó se decrete que la República de Colombia restringe el comercio comunitario, al no permitir el ingreso de cemento por los pasos fronterizos de Ipiales en Nariño.

La República de Colombia deberá pronunciarse sobre el contenido de la demanda a más tardar el próximo 26 de abril, donde se deberá informar las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los fallos del 14 de octubre de 2022 y el 2 de julio de 2023 el TJCA y la Secretaria General de la Comunidad Andina (SGCA).

* **Las consecuencias de la imposición de sanciones de tipo comercial en contra de la República de Colombia en el marco de la Comunidad Andina.**

Con motivo del incumpliendo de compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina, la República de Colombia ha sido objeto de sanciones comerciales las cuales se traducen en la imposición de sobre aranceles a productos originarios de Colombia y exportados a Países Miembros de la Comunidad Andina.

A dichos efectos vale la pena citar las sanciones impuestas por Ecuador y Perú en contra de la República de Colombia con motivo de la prohibición de importación de arroz al territorio colombiano.

El nivel de sanción, es decir, el número de productos a los cuales se puede imponer un sobre arancel, así como el porcentaje del sobre arancel, son determinados por el TJCA y la sanción es impuesta de manera discrecional por cualquier país Miembro de la Comunidad Andina.

De esta manera luego de que el TJCA sentenciara que Colombia incumplió con su obligación de permitir el libre comercio de arroz proveniente del Ecuador, y luego de comprobar el desacato a de su sentencia, autorizó a los Países Miembros a escoger 10 productos originarios de Colombia e imponer un sobre arancel a los mismos del 10%. (Dichos productos pagaban un arancel del 0%)

En ejercicio de la facultad conferida por el TJCA, en agosto de 2017, Ecuador impuso una sanción vigente entre septiembre y noviembre del mismo año. Dicha sanción afectó exportaciones a ese país por USD 190 millones, esto es, el 16% de las exportaciones colombianas a ese país en 2016 en productos como: chicles, caramelos, alimentos para mascotas, galletas, champú, preparaciones para lavar, sostenes y fajas, neveras, baterías, autos.

Con motivo del mismo incumplimiento, entre el 7 de agosto y el 22 de noviembre del año 2018, Perú impuso un arancel del 10% a 10 subpartidas del ámbito agroindustrial (azúcares, chocolates, preparaciones alimenticias, café,), cuyas exportaciones en su momento equivalían a USD 150 millones, es decir 13% de las exportaciones colombianas a ese país.

En junio de 2022, Perú consideró que la República de Colombia continuaba en desacato, motivo por el cual solicitó al TJCA incrementar el nivel de sanción a 30 productos con un sobre arancel del 30%. Si bien el TJCA determinó que la República de Colombia si permitía la importación de arroz proveniente de Perú y Ecuador, y en consecuencia en esta ocasión no desacató su sentencia, la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del documento denominado “*Impacto de la posible sanción de Perú a las exportaciones colombianas de los veinte principales productos*”, concluyó

*“Dadas las estimaciones sobre las variaciones en las cantidades exportadas y la estimación de los valores correspondientes, se encontró que estas subpartidas podrían caer en USD 53,4 millones, siendo su valor de exportación en 2021 de USD 202,6 millones, lo que representaría una caída de 26% aproximadamente en las exportaciones de estos bienes. Si este mismo efecto estimado se traslada a las 20 principales exportaciones a ese país que sumaron USD 411,9 millones (se excluyen Gasoils por ser un producto que se exportó solo en un mes de los últimos 7 años) se esperarían entonces una reducción aproximada de USD 109 millones, un 10% del total exportado a ese país en 2021.*

En tanto la República de Colombia no modifique su medida y continué restringiendo el ingreso de cemento por Ipiales, se verá expuesta a la posibilidad de que Bolivia, Ecuador o Perú impongan sanciones de tipo comercial, tal como sucedió en los años 2017 y 2018, como motivo de la prohibición de importar arroz proveniente de Ecuador y Perú.

* **Deslizamientos en la vía Panamericana.**

Aunado a lo anterior, los reiterados deslizamientos ocurridos en la vía Panamericana, que han dejado incomunicado el suroccidente del país por varios meses, generando problemática de desabastecimiento, principalmente de alimentos, combustibles e insumos industriales en la región como el cemento, que cobra vital importancia para cumplir con los compromisos que el gobierno asumió ante la comunidad del sur del país, para mejorar la infraestructura vial por parte de entidades como el Ministerio de Transporte, INVIAS y ANI, para habilitar vías alternas y reparar los daños de la vía panamericana que comunica al sur del continente.

1. **IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA**

El día 10 de noviembre de 2023, a través del oficio 2-2023-059766, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió respuesta a la solicitud de concepto del proyecto de Ley “Por medio del cual se habilita al departamento de Nariño para la importación de cemento”, en atención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2023 y en consonancia con lo definido en la Directiva 6 del 27 de agosto de 2018, encontrándose que no tiene efectos de impacto fiscal

**Atentamente,**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÉSTOR IVÁN OSUNA PATIÑO**Ministro de Justicia y del Derecho  |  **GERMÁN UMAÑA MENDOZA**Ministro de Comercio, Industria y Turismo |

1. **ANEXOS.**
1. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/DEstadisticos/SGDE100554ANOSDEINTEGRACIONCOMERCIAL.pdf> [↑](#footnote-ref-1)